

ENTRE LA ESPERANZA Y LA INTRASCENDENCIA: LOS VERICUETOS IDEOLOGICOS DEL G-20

David Ibarra
3 de abril de 2009
El Universal

La crisis universal ha puesto en jaque a los basamentos ideológicos del orden económico internacional y sacado a la luz las enormes divergencias ideológicas entre los intereses en juego. Quiérase o no, la solución de toda crisis financiera ha de satisfacer tres requisitos inescapables: reconstituir la demanda de las poblaciones -aun con gasto fiscal-, reconstituir el flujo de crédito a las economías y, hoy, dar respuestas coordinadas a escala universal ya que los problemas son globales.

A mediados de 2007, al presentarse signos inequívocos del rompimiento de las burbujas inmobiliarias y del crédito, la Reserva Federal de los Estados Unidos redujo las tasas de interés del redescuento y luego los requisitos a la concesión de préstamos a la banca. Hasta aquí privó la ortodoxia monetaria, como si se tratase de un problema simple de liquidez del sector financiero.

La inyección de liquidez no bastó para compensar el derrumbe de los precios de los bienes inmobiliarios y de las bolsas accionarias en el patrimonio y la demanda de empresas, de familias, ni en los balances de las instituciones financieras. En esas condiciones los bancos se rehusaron a prestar y el sector privado a pedir prestado, haciendo inútiles los incentivos de la baja de las tasas de interés en la reanimación de la economía real.

Aun así, las autoridades norteamericanas dudaron en intervenir directamente en los bancos al menos para reanudar el crédito. Prefirieron soluciones privadas, es decir, la compra de instituciones quebradas por empresas con mejores finanzas. Las fusiones de Bearn Stearns por J. P. Morgan o la de

Wachovia por Wells Fargo, son ejemplos conspicuos de ese tipo de políticas. Los resultados fueron contraproducentes al facilitar el contagio de empresas sanas y al no acrecentar la oferta neta de crédito a la economía real.

Sin embargo, en casos alejados del núcleo central del sector financiero, se comenzaron a utilizar instrumentos anticrisis de orden distinto. Así se inyectaron recursos de capital a las hipotecarias Fannie Mae y Freddy Mac y a la Aseguradora AIG. Todavía aquí, la intervención estatal se limita a la adquisición de acciones preferentes, sin derecho a voto en los consejos de administración.

El imperativo de rescatar conjuntamente a banqueros y bancos inspiró los intentos de la adquisición estatal de los activos tóxicos. El Plan Paulson de 700 mil millones de dólares iba dirigido a esos propósitos. Surgen entonces dificultades asociadas a la valuación de esos activos para no perjudicar sea a los vendedores o al fisco.

Tomar el control gubernamental de las instituciones financieras y reanudar por ese medio el ciclo del crédito a la producción, sigue encontrando obstáculos de orden político. El principal, se asocia a las resistencias a erosionar el poder de la elite financiera norteamericana que, con el sector inmobiliario manejan alrededor del 22% del producto, 50% por arriba de todo el sector manufacturero. En términos políticos, la búsqueda de soluciones a la crisis enfrenta el dilema -señalado por Stiglitz- entre salvar a los bancos o salvar a los banqueros. De un lado, milita la insatisfacción ciudadana y de los contribuyentes que les culpa de la devaluación de los inmuebles, de los valores en bolsa, de las jubilaciones, del aumento posterior de los impuestos, mientras se autoconceden remuneraciones exorbitantes. Y, de otro, están los riesgos y costos -ideológicos, políticos, presupuestarios- de reemplazar a los dirigentes del sector empresarial más influyentes de los últimos años y tirar por la borda buena parte de los paradigmas económicos en boga.

Con todo, las realidades obligan a la adopción de más y más prácticas keynesianas repudiadas hasta no hace mucho por el monetarismo. El rescate multimillonario del Citigroup y el parcial de la industria automotriz, señalan nuevos alcances del intervencionismo estatal. De otro lado, la Reserva Federal lanza un programa estimado en 800 mil millones de dólares, destinado a la compra de deuda y de títulos inmobiliarios, de tarjetas de crédito y de la pequeña y mediana industria. El financiamiento del programa se sustenta en alto grado en la simple emisión monetaria. Con esos y otros gastos, el déficit público norteamericano difícilmente resultará inferior al 10% del producto, resquebrajando en medida inusitada los equilibrios fiscal y monetario.

La ley de estímulos económicos del Presidente Obama -con erogaciones superiores al 2% del producto-, enfrentó la oposición unánime de los legisladores republicanos. La ideología conservadora prefiere que los estímulos económicos se concreten en reducciones impositivas más que en mayor gasto gubernamental, a pesar de ser más inciertos sus efectos contracíclicos. No se quiere no otorgar al Estado el poder asociado al gasto, sino restárselo mediante la baja de gravámenes. En la negociación inevitable, el paquete quedó integrado por un tercio en bajas de gravámenes y dos tercios en acrecentamiento de erogaciones. En rigor, el Plan Obama asume una estrategia ideológicamente moderada. Supone la adquisición de los activos tóxicos por el sector privado con sobrados financiamiento y garantías públicas, así como un reparto de utilidades o pérdidas desfavorable al fisco, solución muy alejada del abordaje intervencionista a las instituciones financieras. Aun así, se tendrá que doblar el brazo de los banqueros renuentes a vender los activos malos y a reconocer las pérdidas consiguientes, o a pasar las pruebas de solvencia (*stress tests*) a que deberán someterse. Como al Plan Paulson, a la nueva propuesta se le critica por alentar la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas.

No acaban ahí los conflictos de interés que vienen aplazando la cura definitiva de la crisis. A la tradicional oposición norteamericana a respaldar medidas multilaterales, ha surgido la renuencia alemana a la búsqueda de soluciones siquiera regionales en la Unión Europea. Pese a la índole global de la debacle económica, la concepción de las soluciones sigue siendo nacional. No obstante la astringencia financiera de varios de los países ex-socialistas y la de muchos otros en desarrollo, ha llevado a proponer la ampliación de los recursos del FMI y hasta la emisión de derechos especiales de giro. Junto a lo anterior, están las presiones para revisar el sistema de cuotas e influencias en los organismos internacionales por parte del mundo en desarrollo y singularmente de los grandes tenedores de las reservas monetarias internacionales.

De otro lado, los problemas del receso económico sobre todo los manifiestos en déficit de la balanza de pagos y cerrazón del financiamiento externo, inducen a los países a multiplicar las medidas proteccionistas. La Organización Mundial de Comercio proyecta la caída del comercio global en 9% y el Banco Mundial ha identificado 47 medidas (de 17 de los países del G-20) restrictivas al comercio. En consecuencia, hay riesgo no sólo del resurgimiento del proteccionismo, sino de la demolición de los encadenamientos productivos de la globalización.

Por eso, se angostaron las expectativas de la cumbre del G-20 que esperanzadoramente abarcaban desde las de la remodelación de la arquitectura del sistema financiero internacional hasta un nuevo Bretton Woods. Las soluciones a la crisis son conocidas, pero eso no resuelve la maraña ideológica y de intereses contrapuestos a escala nacional, regional y universal. Son todavía grandes las separaciones entre la posición norteamericana, la posición europea y la de los grandes países emergentes.

Los resultados eran de esperar. Se aportaron mayores recursos al FMI -250 mil millones pronto y 500 mil, después-, 100 mil millones en fecha próxima a los

bancos multilaterales de desarrollo y la emisión de 250 mil millones en derechos Especiales de Giro. Aquí los objetivos del acuerdo se refieren a sostener más que al crecimiento, al comercio de los grandes países emergentes, esto es, reducir el riesgo del resquebrajamiento de las redes transnacionales de producción y comercio. Casi se pasó por alto la ayuda al crecimiento de los países más pobres. Más notoria fue la posposición de la propuesta norteamericana de impulsar un programa fiscal común (2% de gasto en cada país) para reanimar las economías y evitar que la expansión del gasto en un país se filtre, sin reciprocidad, al resto del mundo. La iniciativa europea de revisión de las regulaciones financieras también quedó a medias. Se convino en establecer reglas nacionales para los “hedge funds” más importantes, hacer una lista de los paraísos fiscales -con las penalidades a que debieran someterse- y crear un Consejo de Estabilidad Financiera para colaborar -quizás supervisar- al FMI y advertir los riesgos financieros y económicos del futuro. El combate al proteccionismo recibió un respaldo más bien nominal al suscribirse el compromiso de no crear nuevas medidas restrictivas y estar ausente toda mención al estancamiento de la Ronda de Doha. También se remitió al futuro la revisión de cuotas y poderes en los principales instituciones financieras internacionales, a la que aspiraban países como China, a fin de democratizar sus decisiones.

En suma, a pesar de la retórica triunfalista, el mundo todavía no parece inclinado a ir más lejos, aunque deba pagar el costo de prolongar una crisis que sólo en los Estados Unidos cuesta 600 mil desempleados por mes.